



Universidad
Zaragoza

El daño moral en la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Trabajo Fin de Grado - Derecho

AUTOR: MIGUEL GRACIA RUIZ.

DIRECTOR: ÁNGEL GÁRCES SANAGUSTÍN.



SUMARIO

I.	LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS.....	1
II.	INTRODUCCIÓN	2
1.	CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO.....	2
2.	RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS.	3
3.	METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.	4
III.	CONTENIDO	5
1.	EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DAÑO MORAL	5
1.1.	<i>Reconocimiento en derecho del daño moral.</i>	5
1.2.	<i>Reconocimiento del daño moral en el Derecho Administrativo</i>	9
2.	REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.	11
2.1.	<i>Fundamento</i>	11
2.2.	<i>Marco normativo</i>	12
2.3.	<i>Requisitos</i>	13
3.	CONCEPTO DE DAÑO MORAL Y DELIMITACIÓN DE SU CONTENIDO.....	19
3.1.	<i>Concepto de daño moral en la doctrina</i>	19
3.2.	<i>Concepto de daño moral en la jurisprudencia</i>	21
3.3.	<i>Intento de delimitación de su contenido</i>	26
4.	DAÑOS MORALES Y DAÑOS PATRIMONIALES, LA PÉRDIDA DE UTILIDAD.	27
5.	EL DAÑO MORAL Y LAS PERSONAS JURÍDICAS.	30
6.	FUNCIÓN QUE CUMPLE LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL	32
6.1.	<i>Función compensatoria</i>	33
6.2.	<i>Función preventiva</i>	35
6.3.	<i>Función punitiva</i>	36
7.	CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO MORAL	37
7.1.	<i>La difícil labor de cuantificar</i>	38
7.2.	<i>La importancia de los precedentes.</i>	39
7.3.	<i>Aplicación de baremos por parte de los tribunales</i>	40
7.4.	<i>Relevancia de las bases de cuantificación</i>	42
7.5.	<i>La libre cuantificación judicial</i>	44
IV.	CONCLUSIONES DEL ESTUDIANTE.....	45
V.	BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES.	47
VI.	REPERTORIO DE JURISPRUDENCIA.	49

I. Listado de abreviaturas utilizadas.

Art.	Artículo
AP	Audiencia Provincial
CC	Código Civil
CE	Constitución Española
CP	Código Penal
LO	Ley Orgánica
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial.
LRJSP	Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
LPAC	Ley de Procedimiento Administrativo Común
SSTS	Sentencias Tribunal Supremo
STEDH	Sentencia Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STSJ	Sentencia Tribunal Superior de Justicia
STSJAS	Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Asturias
STSJM	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
STSJA	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
STSJPV	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
TEDH	Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
TS	Tribunal Supremo
TSJ	Tribunal Superior de Justicia
TSJAS	Tribunal Superior de Justicia de Asturias
TSJA	Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
TSJM	Tribunal Superior de Justicia de Madrid
TSJPV	Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

II. Introducción

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO

La cuestión de la que se va a tratar en este Trabajo de Fin de Grado va a ser el daño moral en la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, un análisis que se verá marcado por la nebulosa de la discrepancia y la falta de concreción que nos acostumbran los jueces y la doctrina en este tema.

Partiendo del origen y evolución histórica de los daños morales, nos centraremos en su reconocimiento en el ámbito contencioso-administrativo como daños susceptibles de ser indemnizados por la Administración Pública, siendo necesario hacer una limitación y conceptualización de lo que podemos entender por daños morales, y su diferencia con los daños patrimoniales. Asimismo, parte del trabajo será dedicado a determinar cuál es la función que cumple la indemnización de esta clase de daños que por su propia naturaleza y por su estrecha relación con el ámbito personal tienen unos contornos muy difusos.

Para que un perjuicio causado por la Administración Pública pueda ser indemnizado, es necesario, que se cumplan los requisitos exigidos por la legislación vigente, los cuales analizaremos en profundidad, centrándonos especialmente en el requisito de que el daño causado sea evaluable económicamente, cuestión que ha sido muy debatida en tanto que hasta hace poco se consideraba que los daños morales no eran susceptibles de ser valorados económicamente y por tanto se negaba su reconocimiento a los perjudicados. Por consiguiente, se hace necesario el estudio de la cuantificación económica de esta clase de daños y como se han ido evaluando a lo largo de los años por nuestros órganos jurisdiccionales de cara a la búsqueda de un criterio unificador o la aplicación de algún baremo para evitar la inseguridad jurídica de los administrados.

2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS.

El interés por este tema nace de una clase de Derecho Administrativo General sobre responsabilidad patrimonial del Estado, en la que nuestro profesor hizo hincapié al analizar los daños susceptibles de indemnización en los daños morales aludiendo a la famosa STS de los «Novios de Granada» sobre la que hablaremos más adelante.

Durante estos años de carrera en las diferentes asignaturas que hemos estudiado, siempre he tenido especial interés en temas candentes y sobre los que hubiera bastante discrepancia doctrinal con vistas a una posible elección futura de mi tema de TFG, además por el interés que siempre despierta un tema sobre el que existe debate y diferentes posiciones, lo cual enriquece en gran medida su estudio y análisis y sobre todo los medios y materiales disponibles para ello.

En este sentido cuando escuche hablar por primera vez de los daños morales en el ámbito del Derecho Administrativo, me llamó la atención la posible justificación y los criterios en los que un Tribunal se podía basar para cuantificar daños de tal entidad. Durante mi fase de elección de tema para el Trabajo, pude comprobar que el tema del daño moral, relacionado con la Administración Pública se ha planteado en muchos sectores dando lugar a una amplia jurisprudencia en el orden contencioso-administrativo.

Todo ello hizo decantar mi decisión final por este tema como objeto de estudio y análisis para mi Trabajo, esperando aprender y adquirir más conocimientos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y en especial sobre esta materia, con el objeto de tener una visión más amplia de lo que se nos enseña durante el curso, que en cierto modo se queda corto cuando algo realmente te interesa y te gustaría que sus lecciones tuvieran una mayor extensión para poder estudiarlo más en profundidad.

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.

Para la elaboración del presente trabajo he partido de los conocimientos jurídicos adquiridos a lo largo del Grado, en especial los relativos a la rama administrativa del Derecho. Con esta base previa, he establecido esquemáticamente unos elementos básicos o líneas generales sobre los que quería trabajar, a través de los cuales comienza mi estudio e investigación sobre el tema tratado y sobre los cuales irían surgiendo los desarrollos de cada punto y sus ramificaciones.

El método que he seguido ha sido partir de manuales básicos de Derecho Administrativo como fuentes de conocimiento más generales y amplios de cada tema concreto a tratar, ya que facilitan una visión global de los mismos. De manera que, una vez que tenemos dicha visión global y una idea clara de lo que queremos desarrollar en cada tema proseguimos con la siguiente actividad, la búsqueda activa de información más específica sobre cada punto que queremos desarrollar, en manuales y libros concretos sobre dicha materia, artículos de revistas científicas, dictámenes jurídicos, jurisprudencia...

Lo siguiente que vamos a hacer es contrastar toda la información que hemos recopilado, lo cual nos va a permitir valorar la veracidad de la misma, su calidad y evitar incurrir en contradicciones. El último paso, una vez que hemos descartado parte de la información, consiste en darle forma, mediante su redacción ordenada y su adecuada calificación.

III. Contenido

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DAÑO MORAL.

En este apartado analizaremos como se empezó a reconocer históricamente el daño moral como un daño susceptible de ser indemnizado por los tribunales, y su inclusión en el Derecho español en algunas de sus diferentes ramas, como la Civil donde como veremos, el artículo 1902 CC es bastante ambiguo al regular el principio general de responsabilidad extracontractual y deja la puerta abierta al reconocimiento de los daños morales como perjuicios indemnizables, en la Penal donde tiene una gran relevancia, en tanto que las víctimas de un delito puede sufrir esta clase de detrimentos y por lo tanto el autor del mismo tendrá que pagar en concepto de responsabilidad civil su reparación.

No obstante, centraremos en especial nuestra atención al reconocimiento de los daños morales en el orden contencioso-administrativo, haciendo hincapié en cómo cambio el criterio de los tribunales de no reconocer indemnización por los mismos, debido a su consideración como unos daños no susceptibles de ser cuantificados e individualizados y por lo tanto no indemnizables hacia el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en supuestos en los cuales el daño causado al administrado era un perjuicio de clase moral o psicológico.

1.1. Reconocimiento en derecho del daño moral.

Como en muchas otras instituciones del Derecho español, partimos en el origen y reconocimiento de los daños morales de la influencia del Derecho Romano, donde se acepta por primera vez los daños inmateriales como indemnizables. No obstante, es cierto que en una primera fase no se admitió su resarcimiento puesto que como señalaba la *Lex Aquilia*, solamente era preceptivo satisfacer los perjuicios causados sobre bienes que estuvieran dentro del comercio de los hombres, como las cosas, animales o esclavos. Esto daba lugar a que los daños causados a los hombres libres no fueran indemnizables ya que eso supondría traducir su cuerpo en dinero. Posteriormente, se

amplió la responsabilidad a las lesiones causadas en la personalidad humana por medio de la *Inuria*, que abría la puerta al resarcimiento de los daños no patrimoniales.¹

Durante la época medieval debemos destacar la influencia que tuvo el Derecho Romano en el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, donde se da como concepto de daño: «el empeoramiento o menoscabo que un hombre recibe en sí mismo o en sus cosas por culpa de otro», por lo que podemos entender que se reconoce tanto el daño patrimonial, entendido por tal el daño que sufre una persona en las cosas de su propiedad, como el daño extra patrimonial haciendo alusión al daño que se sufre en uno mismo a consecuencia de la acción u omisión de una tercera persona. Sin embargo, durante esta época siguió prevaleciendo la protección de la persona como sujeto titular de bienes materiales, dando menos intereses a los bienes que propiamente integran su ser.

Durante el S.XIX en Europa se produce un gran movimiento codificador, dando lugar a la aprobación de códigos civiles en muchos países, de los cuales podemos extraer la coexistencia de dos sistemas distintos en cuanto al reconocimiento y resarcimiento de daños morales se refiere.²

- Sistema alemán o restringido. Este sistema opta por reconocer la posible indemnización de un perjuicio moral, pero lo limita a los casos expresamente previstos por la Ley. Esta limitación puede provocar que daños que realmente deberían ser indemnizados queden finalmente sin resarcirse, aunque en su favor podemos afirmar la disminución de la arbitrariedad judicial.
- Sistema francés o amplio. Los tribunales tienen la labor de delimitar los casos en los cuales un daño va a ser resarcible, en tanto que únicamente existe una cláusula general del “daño reparable”. Este sistema puede dar lugar a cierta inseguridad jurídica debido al amplio margen de discrecionalidad del que gozan los tribunales, pero como contrapartida se evita que algunos daños injustos queden sin indemnizar.

¹ VICENTE DOMINGO, E., *Los daños corporales: tipología y valoración*, Editorial Bosch, Barcelona, 1994, págs. 91 y ss.

² HURTADO DÍAZ-GUERRA, I., *El daño moral en la responsabilidad patrimonial sanitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p.92.

Nuestro Código Civil regula en su artículo 1902 el principio general de responsabilidad extracontractual en los siguientes términos «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado». Como vemos el precepto no hace mención al daño moral como daño susceptible de reparación, pero haciendo una interpretación extensiva del mismo podemos entender que el daño moral se encuentra incluido en el propio precepto.

En un principio la jurisprudencia negó el daño moral como daño indemnizable, puesto que al no poder cuantificarlo no era posible establecer una cantidad determinada en que valorar el perjuicio causado. No será hasta 1912 en la célebre STS 6 de diciembre de 1912³ en la cual se reconocerá por primera vez el resarcimiento del daño moral por un atentado al derecho al honor de la víctima, debido a una noticia falsa que publicó el periódico 'El Liberal' en la que afirmaba que un fraile había tenido una escandalosa relación con una joven de quince años⁴. El Supremo condenó a 150.000 pesetas al editor y director del 'El Liberal' por el menoscabo de la honra, el honor y la fama de la mujer, lo que en palabras del Tribunal constituía «una total y absoluta expoliación de la dignidad personal, familiar y social de la joven ofendida».

No obstante, esta sentencia no admitía en su totalidad el daño moral, ya que solo reconocía aquel que de una forma indirecta podía tener consecuencias negativas en el patrimonio de la víctima, esto es, la dificultad para encontrar un matrimonio provechoso con el consiguiente menoscabo económico debido a las repercusiones que podía tener en ello la falsa noticia publicada por el diario. Como indica CASANOVA ASECIO «La Sentencia no es tan clara como se desearía [lo cual es lógico, teniendo en cuenta el estado prácticamente embrionario del tema en aquel momento], y no llega a definir los límites ni el contenido de lo que por primera vez en la jurisprudencia acierta a reconocerse y llamarse como “daños morales”, sin resolver otras cuestiones en el caso concreto [...] o la manera en que la valoración de las consecuencias del hecho dañoso ha de darse con el fin de calcular el cuántum indemnizatorio»⁵. Sin embargo, supuso un cambio importante en la posterior jurisprudencia puesto que se había abierto la puerta a la admisión del daño moral como resarcible.

³ STS (Sala de lo Civil) de 6 de diciembre de 1912 [Jurisprudencia Civil, 1912, núm. 95]

⁴ BOTÍAS, ANTONIO, *Una noticia falsa provocó la primera sentencia del Supremo que valoraba en pesetas el derecho al honor*, Diario La Verdad, 25 noviembre 2012. Disponible en: <https://www.laverdad.es/murcia/v/20121125/murcia/cuesta-honra-joven-musso-20121125.html>.

⁵ CASANOVA ASECIO, A.S., «El daño moral: Dificultades prácticas en torno a su prueba y valoración», en *Revista jurídica de la Región de Murcia* VOL. 50, 2016.

El siguiente paso que da la jurisprudencia española para el reconocimiento de los daños morales tiene lugar con la STS de 14 de diciembre de 1917⁶, fallando a favor de un médico que había sido expulsado de manera injustificada de su colegio profesional. El Alto Tribunal concedió una indemnización al médico demandante por el menoscabo que dicha expulsión había causado en su fama y reputación profesional. A partir de estas dos resoluciones la jurisprudencia ha evolucionado reconociendo de forma progresiva en diferentes ámbitos la indemnización por daños morales.

Finalmente debemos referirnos a la responsabilidad por daños morales en el ámbito penal. El Código Penal de 1944 es la primera norma en la cual se regula expresamente la indemnización por esta clase de daños. Su artículo 104 al regular la responsabilidad civil procedente de los delitos o faltas establece: «la indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado, por razón del delito, a su familia o a un tercero», figura que se sigue recogiendo en el vigente Código Penal, ahora en su artículo 113.

Pese a ello, tampoco ha sido pacífico el reconocimiento de esta figura en el ámbito penal, debido a la dificultad en algunos casos de probar la necesaria relación de causalidad entre el delito y el daño causado. Dificultad que se ha generado especialmente en los casos de delitos de carácter patrimonial donde es más complejo apreciar que el hecho delictivo ha causado un daño a la dignidad o salud psíquica o física de la persona o bien ha causado un desasosiego, zozobra, inquietud en la víctima propio de los daños morales.

⁶ STS (Sala de lo Civil) de 14 de diciembre de 1917, RGLJ, Tomo 141.

1.2. Reconocimiento del daño moral en el Derecho Administrativo.

La jurisdicción contencioso-administrativa fue en un principio reticente a reconocer los daños morales como susceptibles de indemnización, debido a la dificultad que esta engendra al tener unos elementos configuradores que hacen que su determinación sea de difícil apreciación.

Esta dificultad proviene de la subjetividad que revisten esta clase de daños al estar plenamente conectados con la parte afectiva e interna del ser humano, la cual innegablemente es diferente y varía en cada ser humano, lo que provoca que estos daños produzcan un efecto distinto en cada persona en función de su personalidad. Además, como veremos más adelante al analizar la diferencia entre daños morales y patrimoniales, los daños morales no producen en el perjudicado una disminución de su patrimonio, ya que afectan a bienes que no son susceptibles de valoración económica, como por ejemplo los daños que pueden producirse en el estado ánimo de una persona.

El debate creado sobre si estos daños debían ser resarcidos por el Estado o, por el contrario, eran daños que el particular debía soportar sin recibir por ello ninguna indemnización se resolvió con el famoso caso de los «novios de Granada» –un interno del Hospital Psiquiátrico de Granada rompió una de las ventanas y se lanzó al vacío cayendo sobre una pareja de novios, causando la muerte al novio–. El caso fue resuelto por la Audiencia Territorial de Granada que admitió el ejercicio de la acción de responsabilidad ejercida por los padres y la novia del fallecido, reconociendo una indemnización en cuya base se tenía en cuenta el daño moral provocado a los afectados por dicho suceso. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo que confirmó la indemnización si bien lo hizo «prescindiendo de toda estimación en orden a la valoración del daño puramente moral»⁷.

A partir de esta resolución en la que se reconoce por primera vez los daños morales como susceptibles de indemnización en el orden contencioso-administrativo fueron apareciendo más sentencias con la misma línea jurisprudencial, podemos citar por ejemplo la STS 26 de septiembre de 1977 en la que el TS valoró no sólo la muerte de alguno de los ocupantes de un vehículo como consecuencia de la caída de un árbol sobre el mismo, sino también la pérdida del feto de una mujer embarazada.

⁷ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 12 de marzo de 1975, (RJ 1975/1798)

Este cambio en el criterio de los tribunales del orden contencioso-administrativo se encuentra ya asentado, de manera que definitivamente la jurisprudencia administrativa acepta de forma plena los daños morales como perjuicios susceptibles de indemnización al incluirlos en el concepto genérico de daño al que se refiere el art. 32 LRJSP entendiendo que en el mismo se incorporan componentes afectivos, las expectativas de vida, la autoestima, progreso personal, el honor, el buen nombre, el prestigio y el precio del dolor, es decir todo tipo de sufrimientos físicos y psíquicos.⁸

A pesar de que ha quedado asentado el criterio de aceptación del daño moral en la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ello no significa que sea una cuestión pacífica en los tribunales, ya que como veremos se trata de un elemento con líneas muy difusas, especialmente lo que se refiere a su prueba y cuantificación.

⁸ HURTADO DÍAZ-GUERRA, I., op. cit., p.97.

2. REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

Antes de entrar a valorar el concepto y la fundamentación del daño moral, así como los principales problemas derivados del mismo, debemos centrar nuestra atención en los requisitos que exige la legislación administrativa en orden a poder reclamar una indemnización a la Administración Pública cuando ésta sea causante de un daño, ya que si no se cumplen los mismos no podremos entablar una acción de responsabilidad para obtener una reparación por los daños originados. Por ello, considero importante analizar aunque sea de forma somera los requisitos y presupuestos generales de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, sin llegar a centrarnos específicamente en cada uno de ellos puesto que no son el principal objeto de estudio del presente trabajo.

2.1. Fundamento.

El ordenamiento jurídico español a través de la institución de la responsabilidad patrimonial ha pretendido cumplir dos funciones:

- Compensar a las víctimas que han sufrido daños en su persona o patrimonio como consecuencia de una actuación u omisión de la Administración Pública.
- Establecer un sistema de control sobre la actuación administrativa. De este modo, se desincentivan las conductas administrativas peligrosas, erróneas o descuidadas.

La responsabilidad patrimonial por la que ha optado nuestro legislador es una responsabilidad objetiva, por tanto, un deber jurídico de indemnizar –dejar indemne o sin daño– a la víctima, lo que supone que la Administración tiene el deber jurídico de reparar o resarcir el daño, aunque no tenga culpa ni negligencia en la producción del mismo.

2.2. Marco normativo.

El principio de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas viene reconocido de forma genérica en la Constitución en su artículo 9.3 como uno de los principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico y como un principio garantizado por nuestra Constitución al referirse a la responsabilidad de los poderes públicos.⁹

Este principio genérico encuentra su concreción en dos preceptos de la propia Constitución. Por un lado, el artículo 106.2 establece que los particulares en la forma legalmente prevista tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y excluyendo los supuestos de fuerza mayor. Por otro lado, los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, también darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, como señala el artículo 121.

Los elementos nucleares del régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial van a estar regulados en la legislación estatal, puesto que el Estado tiene competencia exclusiva sobre el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas de conformidad con el artículo 149.1.18º de la Constitución Española. Lo cual supone la creación de un sistema unitario de responsabilidad, al aplicarse a todas las Administraciones Públicas sin excepción.

El procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial se encuentra recogido en la LPACAP mientras que los principios esenciales sobre la misma son regulados por la LRJSP.

⁹GARRIDO MAYOL, V., *La responsabilidad patrimonial del Estado, especial referencia a la responsabilidad del Estado legislador*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004 p.13.

2.3. Requisitos

La declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de tres requisitos:

- El daño causado en la persona o patrimonio de un ciudadano debe ser efectivo, individualizado o fácilmente individualizable y evaluable económicamente.
- Debe de mediar una acción u omisión imputable a una Administración Pública.
- Debe darse la existencia de una relación de causalidad entre el daño producido y la actuación administrativa.

a) Daño efectivo, individualizable y evaluable.

La lesión o el daño tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- El daño debe ser antijurídico, ilegítimo, es decir un daño que el administrado no tenga el deber jurídico de soportar de conformidad con el artículo 32.1 LRJSP.
- Debe tratarse de un daño efectivo, lo cual significa que no son indemnizables las meras expectativas de derecho o suposiciones de futuro, solo será indemnizable el daño emergente y el lucro cesante, como ha señalado el TS en reiterada jurisprudencia: «Las expectativas no constituyen derechos adquiridos y, por tanto, no existe lesión efectiva¹⁰».
- El daño no debe ser abstracto o genérico, debe ser individualizado con relación a una persona o grupo de personas y además ha de ser efectivo, esto es, que se haya materializado en el momento de reclamar la responsabilidad patrimonial como indica el artículo 32.2 LRJSP.
- Finalmente, el daño debe ser evaluable económicamente, ha de ser cuantificable en términos monetarios a tenor del artículo 32.2 LRJSP.

La labor de cuantificación del daño le va a corresponder al interesado, que tendrá que dar una valoración justificada de la misma o al menos demostrar las

¹⁰ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 6 de junio de 2011 (Roj 3921/2011)

bases necesarias para su determinación¹¹. En este punto es donde surge la gran problemática de los daños morales, ya que lo que puede parecer una labor sencilla cuando nos referimos a la cuantificación de los daños materiales, dista mucho de la difícil operación en que consiste la valoración de los daños morales y que como hemos visto fue el principal motivo por el cual los Tribunales del orden contencioso-administrativo no reconocieron estos daños como resarcibles hasta los años 70.

b) Acción u omisión imputable a una o varias Administraciones Públicas.

En primer lugar debemos determinar que se entiende por Administración Pública a efectos de la responsabilidad patrimonial. La Administración Pública son todos los entes que forman parte del sector público. La LRJSP en su artículo 35 ha ampliado la imputabilidad de responsabilidad a entidades de naturaleza jurídica privada, cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de entidades de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza. Por su parte el artículo 32.9 del mismo cuerpo legal ha establecido la responsabilidad de la Administración Pública por los daños causados por sus contratistas, cuando estos daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de un contrato sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. Por el contrario, responden los contratistas en el caso de que el daño causado por ellos se deba a su negligencia dolo o culpa.

El daño causado por la Administración puede deberse a su actividad, pero también a su inactividad y al retraso en el actuar. La lesión causada por la Administración debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, como señala el artículo 32.1 LRJSP

En cuanto al daño derivado del funcionamiento anormal, la imputación del daño a la Administración no genera gran problema al tratarse de un daño por culpa o responsabilidad subjetiva. No obstante, en el supuesto de un perjuicio derivado del funcionamiento normal de la Administración deberemos aplicar la *teoría del riesgo*, ya

¹¹BERMEJO VERA, J., *Derecho administrativo básico parte general*, Vol. I, 12º ed., Thomson –Civitas, Madrid, 2016, p.403.

que son casos de responsabilidad objetiva o sin culpa. Como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la aplicación de esta teoría ha derivado en una muy relevante matización de la responsabilidad objetiva, en tanto que se entiende que la mera titularidad del servicio por la Administración no puede determinar su responsabilidad respecto de cualquier circunstancia lesiva que relacionada con el mismo se pueda producir, con la advertencia de que entenderla de otra forma supondría convertir a la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos.¹²

Sentado lo anterior, pasamos a analizar los riesgos por los que la Administración va a responder en caso de funcionamiento normal de sus servicios. En principio son dos:

- Lesiones que se producen sobre derechos que han sido previamente patrimonializados por el ciudadano como consecuencia de una actuación administrativa. Es decir, una persona física o jurídica adquiere un derecho otorgado por la Administración, pero posteriormente ese derecho es lesionado por la propia Administración como consecuencia de una actuación legítima. Por ejemplo, tras conceder una autorización administrativa a un ciudadano para establecer un puesto de comercio, posteriormente decide retirárselo ya que la Administración va a realizar una obra pública en esa misma localización.
- Sobre riesgos considerados como especialmente graves. Corresponde a los órganos jurisdiccionales determinar si el riesgo es especialmente grave y si deriva en responsabilidad patrimonial de la Administración, pero debemos hacer dos excepciones en este caso.

Por un lado en los supuestos de aceptación del riesgo por el particular, el llamado consentimiento informado supone que una persona acepta ciertos riesgos habiendo sido previamente informado de ellos porque entiende que los riesgos que se pueden generar quedan compensados con los beneficios de la actuación administrativa.

Por otro lado, como señala el artículo 34.1 LRJSP no son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido

¹² STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 13 de octubre de 2015, (RJ 4198/2015)

prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes pudieran establecer en estos casos. No se puede imputar ese riesgo, que finalmente se genera por funcionamiento normal de una Administración en tanto que en el momento en que actuó la Administración el estado de la técnica o ciencia no podía hacer que la Administración conociera que ese riesgo se podía generar.

c) Relación de causalidad entre el hecho imputado a la Administración y el daño causado.

Finalmente es necesario la existencia de un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido. Dicha relación debe ser directa, inmediata y exclusiva, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo, sin embargo la jurisprudencia actual admite otros supuestos de causalidad: indirecta, ya que puede que la actuación administrativa no afecte al supuesto dañoso de forma directa pero si lo ha podido influenciar indirectamente; mediata, en tanto que el daño ha podido surgir tiempo posterior de la actuación administrativa y; concurrente, pues es evidente que en la producción del daño han podido confluir junto con la actuación administrativa otras causas.¹³

La vinculación de la actividad administrativa con el perjuicio causado supone una relación causa – efecto, lo cual ha sido denominado *imputabilidad del daño*, es decir, la determinación de *quién* lo ha generado¹⁴. De este modo, la relación de causalidad puede verse interrumpida por tres motivos distintos:

- Intervención de un tercero. La intervención de un tercero, ajeno al perjudicado y a la Administración, cuando su conducta haya influido en la producción del daño puede dar lugar bien a la exoneración de responsabilidad de la Administración cuando resulte acreditado que ha cumplido adecuadamente sus función o bien a una reducción de la cuantía de la reparación que corresponda satisfacer a la Administración cuando haya concurrencia de culpas.

¹³ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 5 de junio de 1998 (RJ 1998\5169).

¹⁴ GAMERO CASADO, E. y FERNANDEZ RAMOS, S., *Manual Básico de Derecho Administrativo*, 11ª ed., Tecnos, 2014. p. 615.

- Intervención de la propia víctima. Puede darse el caso de que el sujeto lesionado haya realizado alguna acción que interrumpa o altere la relación de causalidad. Un supuesto muy frecuente es el caso del particular que tiene un accidente de coche al circular a una velocidad superior a la permitida por una carretera que se encontraba en un estado deteriorado. La existencia de culpa de la víctima puede determinar bien la exoneración de responsabilidad, o bien una aminoración en la cuantía de la indemnización que corresponde satisfacer a la Administración, es decir que la Administración deberá indemnizar únicamente por el porcentaje que le corresponda en relación con el daño causado como en el ejemplo de accidente de tráfico expuesto.
- Fuerza mayor. La propia Constitución en su artículo 106.2 y la LRJSP en su artículo 32.1 establecen el derecho de los particulares a ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor, que eximen de responsabilidad a la Administración.

Debemos diferenciar entre la fuerza mayor y el caso fortuito ambos son conceptos jurídicos indeterminados que se han construido doctrinalmente a partir de la legislación civil, artículo 1105 CC. No obstante, en Derecho Administrativo estos conceptos han adquirido una dimensión diferente, puesto que se entiende que ambos sucesos son imprevisibles e inevitables. La diferencia en Derecho Administrativo entre estas figuras radica en su relación con el servicio público.

En el caso fortuito hay indeterminación e interioridad en el sentido de que la causa del daño es desconocida, pero se trata de un riesgo y eventual daño interno al servicio de que se trata, es decir inscrito en el funcionamiento de los servicios públicos provocado por su propia naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos o por su mismo desgaste.¹⁵ A modo de ejemplo podríamos poner el caso de un funcionario que se encuentra trabajando con un soplete en una obra siguiendo todas las medidas de seguridad pertinentes, sin embargo salta una

¹⁵ CUADRADO ZULOAGA, D., «Fuerza Mayor como causa eximente de la responsabilidad patrimonial», en *Actualidad Administrativa*, n. 19, Sección Estudios de Jurisprudencia, 2005.

chispa que prende un objeto inflamable y genera un incendio en un terreno privado. El daño era imprevisible e inevitable, pero procedida de un servicio interno. La jurisprudencia de Tribunal Supremo ha señalado que los daños producidos por caso fortuito no son obstáculo a la declaración de responsabilidad pese a ser independientes del actuar del órgano administrativo e incluso de la posibilidad de evitar los efectos dañosos aun empleando la máxima diligencia.¹⁶

Por el contrario, en la fuerza mayor el riesgo y el eventual daño es completamente ajeno o exterior al ámbito del servicio u organización administrativa en cuyo marco se produce, de modo que entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico, siendo de igual forma un acontecimiento irresistible e inevitable. Por ejemplo, los tribunales han considerado que concurría fuerza mayor y ha eximido de responsabilidad a la Administración en supuestos como los siguientes: por efecto del desplome de una vivienda, como consecuencia de un corrimiento de tierras de la ladera montañosa donde había sido construida, producto de un intenso temporal de lluvias, se produjo la muerte de una de las ocupantes del inmueble¹⁷; en un concreto tramo de la carretera se produjo un desprendimiento de rocas, algunas de las cuales impactaron en un vehículo que en ese momento circulaba por la calzada, provocándole cuantiosos daños.¹⁸

¹⁶ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 9 de mayo de 1978.

¹⁷ STSJ Asturias (Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 2ª) de 11 diciembre de 1996. (R.º 1214/1995)

¹⁸ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 3ª) de 10 marzo de 1992. (R.º 135/1986).

3. CONCEPTO DE DAÑO MORAL Y DELIMITACIÓN DE SU CONTENIDO.

A pesar del reconocimiento del daño moral como perjuicio indemnizable por los tribunales españoles en 1912 en el orden civil, su definición como concepto jurídico no se encuentra recogido en ningún texto legal. Por su parte, ni la jurisprudencia, ni la doctrina se ha puesto de acuerdo en dar un concepto unitario del mismo, al tratarse de una figura jurídica muy resbaladiza por su propia configuración, en tanto que se redefine constantemente por la evolución de la sociedad y la consideración social y jurisprudencial de los daños, lo cual añadido a la heterogeneidad de supuestos que se producen hacen muy compleja la delimitación y categorización de forma universal de su concepto y de los elementos que lo integran.

Para el estudio e intento de concreción del concepto del daño moral utilizaremos dos vías diferentes, en primer lugar la doctrinal, donde la falta de consenso ha llevado a la existencia de diferentes corrientes doctrinales, de las cuales nos detendremos en las más autorizadas y especializadas, y en segundo lugar la vía jurisprudencial, en la cual cómo podremos comprobar existe un amplio abanico de pronunciamientos sobre lo que debe entenderse por daño moral y que puede entenderse contenido en el mismo, dimanante de la gran dificultad de dar un concepto unitario y general del daño moral al tratarse de algo tan concreto y centrado en el caso específico.

3.1. Concepto de daño moral en la doctrina.

Como hemos adelantado no se ha elaborado por la doctrina un concepto unitario del daño moral consecuencia de la falta de consenso sobre su concepción. En términos generales son dos las corrientes doctrinales principales que abarcan la difícil tarea de delimitar el concepto y contenido del daño moral.

3.1.1. Concepción negativa del daño moral.

Las corrientes doctrinales que apuestan por una concepción negativa del daño moral básicamente propugnan definir el daño moral contraponiéndolo al daño patrimonial, es decir entienden el daño moral como un perjuicio que no supone una pérdida de dinero o una falta de ganancia, ni tampoco entraña para la víctima ninguna consecuencia pecuniaria ni disminución de su patrimonio por tener por objeto un interés de naturaleza no patrimonial. Por ello, todo

aquello que no puede ser identificado como daño material o patrimonial se subsume en la categoría de daño moral o extrapatrimonial. Como indica DÍEZ - PICAZO¹⁹ «la definición negativa no es otra cosa que puro escapismo de problemas que tanto en lógica como en pura exégesis del ordenamiento jurídico resultan muy difíciles de resolver».

3.1.2. Concepción positiva del daño moral.

Las teorías que defienden una concepción positiva del daño moral nacen con el objeto de dar respuesta a la falta de concreción que generaba la definición del daño moral en contraposición con el daño patrimonial. Por lo tanto, esta corriente doctrinal va a tratar de definir el daño moral en base a sus propios caracteres y con independencia de su repercusión o no en el ámbito patrimonial. Debemos advertir que dentro de la concepción positiva del daño moral existen diversas formas de entenderlo. Sin embargo, solamente nos centraremos en la que entiende el daño moral como «pretium doloris» por su importancia histórica y por ser una de las conceptualizaciones más extendidas en la doctrina y tenidas en cuenta por la jurisprudencia de nuestros tribunales.²⁰

La expresión *pretium doloris* es donde posiblemente tenga su origen lo que hoy en día conocemos como daño moral. Es una concepción que se ha defendido durante muchos años y que a día de hoy sigue teniendo una especial relevancia. No obstante, esta consideración no se encuentra exenta de crítica, se ha dicho de la misma que es demasiado restrictiva ya que identifica el daño moral únicamente con el puro dolor físico de la víctima y el perjuicio moral que afecta a la esfera psíquica de sus sentimientos y que se produce como consecuencia del perjuicio ocasionado.

Esta concepción es demasiado estricta puesto que con la evolución constante de la sociedad, el contenido del daño moral y sus límites se han visto ampliados tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, de forma que si identificáramos el daño moral únicamente con el *pretium doloris* dejaríamos de contemplar muchos supuestos en los que se produce un perjuicio moral.

¹⁹ DÍEZ-PICAZO, PONCE DE LEÓN, L., *El escándalo del daño moral*, Thomson Civitas, Navarra, 2008, p.74.

²⁰ CASADO ANDRÉS, B., «El concepto del daño moral, Estudios doctrinales», en *Revista de Derecho UNED*, n. 18, 2016, p.410.

Por todo ello, el daño moral debe ser entendido más allá del *pretium doloris* al tratarse éste en definitiva de una manifestación más del amplio e indeterminado concepto de daño moral.

3.2. Concepto de daño moral en la jurisprudencia.

Una vez que se trata y reconoce la cuestión del daño moral por primera vez en los tribunales españoles en 1912, sentencia que se centra en el caso concreto, sin llegar a definir sus límites ni su contenido, como ya hemos indicado. Los diferentes pronunciamientos judiciales sobre casos de daños morales planteados ante los tribunales han ampliado los márgenes de los supuestos en los que se reconoce como perjuicio indemnizable el daño moral sufrido por el sujeto perjudicado, pero sin llegar a establecer una delimitación concreta de su contenido y sin llegar a establecer un concepto uniforme del mismo.

La realidad es que nuestros tribunales no nos ofrecen una definición del daño moral, normalmente se limitan a resolver el caso concreto del que están conociendo sin entrar a pronunciarse sobre su determinación, dando por tanto una aportación meramente práctica y no teórica. Como señala HURTADO DÍAZ-GUERRA «podemos diferenciar dos bloques de sentencias por un lado, las que sin ofrecer un concepto expreso de daño moral destacan los bienes jurídicos que pueden formar parte de este tipo de daños (supuestos tipo), y por otra parte el bloque de aquellas sentencias que esbozan un intento de ofrecer un concepto».²¹

Para este análisis considero más oportuno por motivos prácticos e ilustrativos partir del bloque de sentencias que se limitan a destacar los bienes jurídicos que pueden considerarse integrados en el contenido del daño moral. Los supuestos que con más frecuencia son admitidos por nuestros tribunales como dimanantes de un perjuicio de estas características podrían ser clasificados de forma genérica en tres bloques:

²¹ HURTADO DÍAZ-GUERRA, I., op. cit., p.108.

a) Aquellos que afectan al ámbito psicológico y afectivo.

El elenco de posibles supuestos que pueden incardinarse en este bloque es muy amplio y variado, se trata de supuestos que provocan padecimiento psíquico o espiritual, zozobra, ansiedad, pesadumbre, temor, presagio de incertidumbre, sensación anímica de inquietud, desazón... Estos resultados que afectan al ámbito psíquico de la persona, en cuanto a su estabilidad emocional son como vemos muy genéricos, lo cual sumado a que cada ser humano es psicológica y afectivamente diferente da lugar a que se presenten ante los tribunales una gran cantidad de demandas por parte de personas que han sufrido esta clase de repercusiones negativas en su ámbito personal por actuaciones de lo más variadas.

Así, los tribunales españoles han reconocido la indemnización de daños morales en algunos supuestos como los siguientes. Por denegación de la práctica de amniocentesis y la imposibilidad de optar en plazo a la interrupción voluntaria del embarazo, del cual nació una niña con Síndrome de Down, se reconoce una indemnización de 150.000€ al haber sido lesionado el poder de autodeterminación de la madre reclamante, aunque el TS aclara que para que se produzca un daño moral no es suficiente una mera situación de malestar o incertidumbre, sino que es necesario que ésta tenga una repercusión psicofísica grave.²²

Por las horas de tensión, incomodidad, incertidumbre y molestias producidas por demora sin una explicación razonable de diez horas en el transporte aéreo, además de la preocupación por la pérdida de un día de trabajo y la inquietud por regresar al domicilio después de un viaje de novios.²³

Por el dolor sentimental, aflicción, y malestar causados a los familiares de un difunto cuyos restos mortales fueron trasladados a un osario común, al haber caducado la concesión del nicho donde estaba enterrado por no pagar los derechos correspondientes, lo cual fue realizado sin conocimiento de la familia y

²² STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 16 de octubre de 2007, (rec. 9768/2003)

²³ STS (Sala de lo Civil) de 31 de mayo de 2000 (RJ 2000/5089)

sin que el Ayuntamiento notificará dicha circunstancia a los herederos para permitir a estos el traslado de los restos a otro lugar.²⁴

b) La lesión a los derechos de la personalidad.

Recordamos que los derechos de la personalidad consagrados en los artículos 15 y 18 de la CE son derechos subjetivos que se dirigen a proteger la integridad personal del ser humano, tanto en su vertiente física –vida e integridad física–, como espiritual –honor, intimidad, imagen, identidad, entre otros–.

La LO 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, reconoce expresamente la obligación de reparar el daño moral en caso de que una intromisión ilegítima en alguno de estos derechos haya causado un perjuicio de esta índole. Las lesiones de los derechos de la personalidad suelen darse con más frecuencia en relaciones inter particulares, pero la Administración también puede ser causante del daño

Así, podemos citar la STSJ País Vasco de 4 de mayo de 2000 en la que se condena al Gobierno Vasco a indemnizar al recurrente en la cantidad de 100.000 pesetas por los daños morales que le produjeron su detención ilegal por parte de la policía. Daños morales que el actor justifica por la impotencia de ver cómo delante de su casa, mujer e hijos le llevaron esposado por un hecho del que ni siquiera conocía su existencia, así como al descrédito en su honor y al impacto psicológico sufrido por la detención de la que se enteraron en el trabajo y en el vecindario con el descrédito que ello supone.²⁵

El TS en 2002 reconoce el derecho de los recurrentes a ser indemnizados solidariamente por la Administración del Estado en la cantidad de 40.000€ en concepto de reparación de los daños sufridos en su honor por la publicación de una nota informativa de la Dirección General de la Policía, sin la autorización

²⁴ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 18 de julio de 2000, (rec. 2005/1995). Esta resolución es una de las muchas que se dictan tras el caso «panteones de Barcelona SSTS 31/01/1992», en el cual el TS condenó al Ayuntamiento de Barcelona a indemnizar en la cantidad de un millón de pesetas a los perjudicados –en concepto de daño moral–, por el funcionamiento gravemente anormal de sus servicios, después de que «Instituto Municipal de los Servicios Funerarios» desalojara por error varios panteones, trasladando los restos mortales a un osario común y, en consecuencia, devolviéndolos vacíos a sus titulares una vez constatado el error.

²⁵ STSJPV (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 4 de mayo de 2000 (R° 484/2000)

del Juez de Instrucción, por la que se informaba de la incautación policial de una edición fraudulenta de discos compactos y de la imputación de los actores como autores de un delito, del que no llegó a ser juzgado, pues el juez instructor archivó las diligencias previas incoadas, por no ser los hechos constitutivos de infracción penal.²⁶

c) La vida y la integridad física.

Dentro de este bloque tendrían cabida los daños morales producidos por la lesión del bien jurídico vida, es decir el sufrimiento y padecimiento que genera la pérdida de un ser querido y el vacío que deja en los afectados. Además, debemos englobar los daños morales provocados por la lesión del bien jurídico integridad física, dentro del cual pueden darse varias posibilidades. No debemos confundir el daño corporal consistente en la lesión física y psíquica pura con el daño moral, es decir el sufrimiento psíquico o espiritual que se puede derivar de una lesión.

Por un lado, es necesario hacer referencia a los supuestos en que se produce un perjuicio estético, según el artículo 101 de la Ley 35/2015 el perjuicio estético puede definirse como «Cualquier modificación que empeora la imagen de la persona. Es un perjuicio distinto del psicofísico que le sirve de sustrato y comprende tanto la dimensión estática como la dinámica de lesiones físicas permanentes». La dimensión estática engloba alteraciones como cicatrices, pérdidas de piezas dentarias, alteraciones de la pigmentación, manchas, mientras que la dimensión dinámica acogería casos como pérdida de movilidad o de armonía en los movimientos, tics nerviosos, cojeras. HURTADO DÍAZ-GUERRA añade que el perjuicio estético se trata de «aquel que sufre la persona en su aspecto, en relación con los cánones sociales de belleza; siendo una de las posibles consecuencias del daño corporal, que, por su repercusión en la esfera interior y social del individuo, se presenta como otra de las manifestaciones del daño moral.²⁷

²⁶ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 7 de febrero de 2007 (rec. 6246/2002)

²⁷ HURTADO DÍAZ-GUERRA, I., op. cit., p.185

Por otro lado, nos encontramos el daño moral que se deriva del padecimiento por una persona de un daño físico, lo cual abarcaría el sufrimiento personal del perjudicado ligado al hecho lesivo y el sentimiento de la dignidad lastimada o vejada, el daño psicológico, o la perturbación en el normal desarrollo de la personalidad.

A pesar de que esta clase de supuestos suele tener más frecuencia en la jurisdicción penal y civil, también se han dado muchos casos en la rama Contencioso-Administrativo. Así, por ejemplo el TSJM condenó al Ayuntamiento de Madrid a indemnizar 710.000€ como responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del desprendimiento de una rama de árbol en el Parque de El retiro, la cual golpeó a la víctima, causando su fallecimiento.²⁸

Esta clase de daños morales tiene especial incidencia en el ámbito de la responsabilidad patrimonial sanitaria. En el año 2011, el TS condenó al Instituto Catalán de la Salud a indemnizar a un paciente en la cifra de 75.000€ en concepto de daño moral por la pérdida de calidad de vida y perjuicios ocasionados en el reclamante, quien fue intervenido quirúrgicamente de gastrectomía, lo que le provocó como secuela un síndrome de Dumping post-gastrectomía²⁹, así como trastorno ansioso depresivo, además fue una intervención donde no se actuó conforme a la Lex artis «ya que no se observó el requisito de la obtención de un previo consentimiento escrito del paciente para la realización de la intervención, basado en una información completa sobre su proceso».³⁰

El TSJA condenó en 2015 a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía a indemnizar solidariamente la cantidad de 58.947€ junto con una empresa de construcciones y estampaciones por los daños y perjuicios que sufrió el reclamante a consecuencia de un accidente de tráfico, el

²⁸ STSJM (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 22 de diciembre de 2016 (rec. 220/2016)

²⁹ El síndrome de Dumping es una de las causas más frecuentes de morbilidad tras la cirugía gástrica. El síndrome se caracteriza por síntomas gastrointestinales como sensación de plenitud, retortijones, náuseas, vómitos, diarrea y síntomas motores como sudación, inquietud, debilidad, palpitaciones.

³⁰ STS (Sala de lo Contencioso – Administrativo) de 25 de mayo de 2011 (rec. 5513/2006)

cual se produjo debido a que el conductor perjudicado freno sobre una señal de ceda el paso dibujada en el suelo, circunstancia que provocó la pérdida del control de su vehículo al bloquearse la rueda trasera haciendo que cayera sobre la calzada, siendo dicha señal la causa principal del siniestro al generar un elevado riesgo para la circulación debido a la pintura blanca deslizante con la cual está estampada en el suelo. El Tribunal reconoce como parte integrante de la indemnización las repercusiones morales del accidente sufrido y las secuelas que se le han generado con limitaciones en su vida cotidiana, al ser declarado el actor en situación de incapacidad permanente total³¹

3.3. Intento de delimitación de su contenido.

Una vez realizado el análisis jurisprudencial y doctrinal sobre la concepción del daño moral, considero conveniente delimitar el contenido del daño moral enumerando aunque sea de manera no exhaustiva enumerar algunos de los elementos que pueden integrar su contenido.

Sentimientos de pena y dolor, vergüenza, culpabilidad, inferioridad, depresión de la autoestima, inseguridad, sentimientos de incertidumbre, zozobra o malestar cuando acarreen una repercusión psicofísica grave, deshonor o público desprestigio, disminución de la confianza externa, limitación de las expectativas sociales ya adquiridas, sentimiento de privacidad violada, perturbación en el normal desarrollo de la personalidad³². Además, todo ello puede dar lugar a una serie de manifestaciones físicas como trastorno por ansiedad, trastornos depresivos alteración del sueño, inestabilidad angustia vital...

Se trata de una enumeración no exhaustiva debido a que el daño moral puede verse proyectado sobre muchas otras esferas al ser un término muy amplio y con unos contornos tan difusos y de tan difícil concreción, puesto que como hemos comentado se trata de un concepto dinámico y cuya evolución se encuentra en cierta manera aparejada al desarrollo de la sociedad y a la complejidad interna del ser

³¹ STSJA (Sala de lo Contencioso – Administrativo en Sevilla) de 9 de julio de 2015 (rec. 33/2013).

³² MACIA GOMEZ, R., «La dualidad del daño patrimonial y del daño moral», en *Revista de responsabilidad civil y seguro*, n. 36, 2010, p.24

humano en tanto que además de afectar a los bienes y derechos de la personalidad afecta a su esfera psicofísica.

4. DAÑOS MORALES Y DAÑOS PATRIMONIALES, LA PÉRDIDA DE UTILIDAD.

Llegados a este punto, una vez delimitado en la medida de lo posible el concepto y contenido del daño moral conviene llevar a cabo la distinción entre los daños morales y los daños patrimoniales, puesto que esta diferenciación nos va a servir como punto de partida para analizar las funciones que cumple la indemnización del daño moral en nuestro derecho y en especial en el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Para ello vamos a partir de un análisis económico del Derecho, en función de la aptitud del dinero para reponer el daño o pérdida de utilidad que sufre la persona perjudicada. La disminución de utilidad que se produce con un daño de carácter patrimonial es compensable con dinero o en su caso por bienes intercambiables por dinero, por el contrario el dinero nunca puede llegar a compensar la pérdida de utilidad que se produce con un daño moral. Para poder verlo mejor, emplearemos un ejemplo en el que se producen dos consecuencias totalmente diferentes.

Un conductor está atravesando un puente junto con su esposa, en el mismo puente hay también un vehículo aparcado y vacío. Debido a la omisión por parte de la Administración titular del puente de repararlo ya que se encuentra en un estado deplorable, el puente se derrumba. Como consecuencia, el vehículo aparcado resulta siniestro total y del otro vehículo el conductor sale indemne del accidente pero su esposa fallece en el acto.

El dueño del vehículo que ha quedado siniestro total ha sufrido un daño patrimonial, que le ha provocado una disminución de utilidad, la cual va a ser compensable en su totalidad al ser indemnizado con el mismo valor que tenía su vehículo. Por el contrario, en el caso del conductor del vehículo, además del daño patrimonial que le haya podido suponer el deterioro del coche, ha sufrido un daño moral que implica una pérdida del nivel de utilidad que no va poder ser compensable con dinero, puesto que el sufrimiento que ha experimentado dimanante del fallecimiento de un ser querido en ningún caso va a poder ser reemplazable por dinero, sea cual sea la cantidad.

A continuación reproduzco los dos gráficos que utiliza GÓMEZ POMAR³³, para mostrar la diferencia en cuanto a los efectos del daño y la reparación pecuniaria sobre la función de utilidad de la víctima.

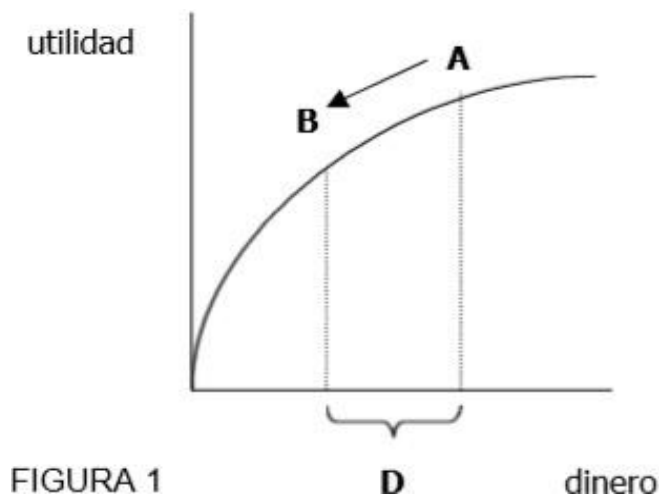


FIGURA 1

La Figura 1 muestra los efectos de un daño patrimonial por importe D, que supone un desplazamiento hacia la izquierda en su curva de utilidad $A \rightarrow B$, pero una indemnización por ese mismo importe la coloca de nuevo en su posición inicial A, restableciendo la utilidad perdida. En el ejemplo expuesto la pérdida de utilidad producida por el siniestro del vehículo se ve restablecida por una indemnización en una cantidad de dinero equivalente, dejando al perjudicado en la misma situación en la que estaba.

³³ GÓMEZ POMAR, F., «Daño moral», en *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, n. 1, 2000, p.2

Por el contrario, en la segunda figura vemos como el impacto de un daño moral se plasma en una nueva curva de utilidad que se sitúa por debajo de la anterior, pues la misma cantidad de dinero le reporta una utilidad menor, sin que una compensación monetaria pueda retornar a la víctima al nivel de utilidad de que gozaba antes del evento dañoso. Como vemos, la víctima de nuestro ejemplo por mucho dinero que reciba por la compensación de su pérdida no podrá verse restituida a la situación anterior al accidente, puesto que el dinero no va a poder reparar el fallecimiento de su esposa, ya que el dinero no le ofrece la misma utilidad que antes. Después de haber sufrido el daño su función de utilidad ha cambiado y queda por debajo de la primitiva: la víctima recibe de su dinero una utilidad total menor de la que disfrutaba antes de sufrir el daño.

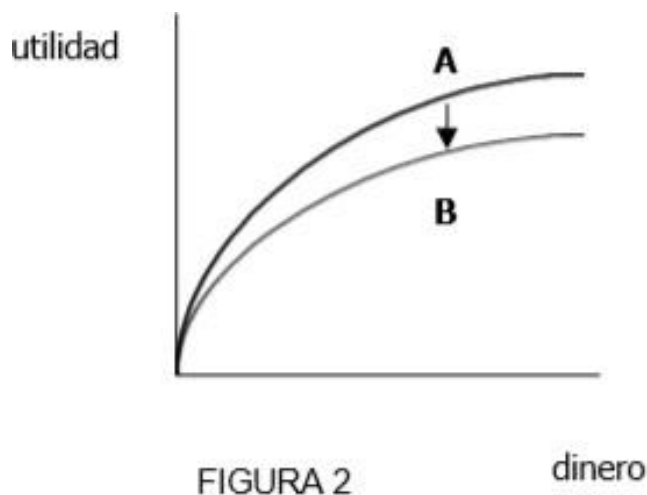


FIGURA 2

Por todo ello, podemos entender como daño material o patrimonial el menoscabo que se produce en los bienes que integran el patrimonio de una persona y que por tanto son susceptibles de valoración económica mediante baremos, protocolos o pruebas periciales, mientras que los daños morales como ya hemos expuesto, se identifican con el dolor, angustia, aflicción física o espiritual, y otros padecimientos que se han infligido en la víctima y que a diferencia de los daños patrimoniales, no pueden repararse ni con dinero ni con otros bienes.

5. EL DAÑO MORAL Y LAS PERSONAS JURÍDICAS.

Otra de las cuestiones que ha sido ampliamente debatida por la doctrina y la jurisprudencia ha sido si las personas jurídicas pueden sufrir daños morales. En este sentido son dos las principales corrientes doctrinales sobre esta materia.

a) **La persona jurídica no puede sufrir daño moral.**

Aquellos autores que niegan los daños morales a las personas jurídicas parten de un carácter restringido del daño moral, entendiendo que éste se identifica con la lesión a los sentimientos, el sufrimiento físico o psíquico, angustia o preocupación que, disminuye la situación de utilidad o el nivel de bienestar de las víctimas, de modo que es imposible que las personas jurídicas puedan sufrir esta clase de daños al carecer de la dimensión psicológica necesaria para ello.

Asimismo consideran que las personas jurídicas no pueden ser titulares del derecho al honor o de otros derechos de la personalidad, por ser exclusivamente inherentes a los seres humanos y, puesto que estos entes carecen de una dimensión psicológica, no pueden sufrir ofensas y por lo tanto, tampoco daño moral.

Otro argumento sobre el que se sustenta esta teoría es la improcedencia de la reparación pecuniaria por daños morales a estos entes, ya que como veremos más adelante la principal función que cumple la reparación del daño moral es de carácter compensatorio, es decir compensar a la víctima el agravio cometido y paliar, en la medida de lo posible, con dinero el sufrimiento, lo cual no puede ser extensible a las personas jurídicas al no poder sentir éstas las satisfacciones que los seres humanos conseguimos con ese dinero.³⁴

³⁴ MORENO MARTÍN, M.D, *El daño moral causado a las personas jurídicas*, Tesis doctoral, Manzano Fernández (dir. tes.), Universidad de Córdoba, 2016, p. 70,

b) La persona jurídica sí puede sufrir daño moral.

Los defensores de esta teoría parten de un concepto amplio de daño moral, si se limita el daño moral a los sufrimientos o padecimientos físicos o psíquicos es imposible que se puedan reconocer estos agravios en las personas jurídicas, ya que es innegable que carecen de esta dimensión psicológica.

Según esta corriente doctrinal y como señala CASADO ANDRÉS «las personas jurídicas pueden pretender legitimación activa para estos daños por entender que no sólo se ocasiona daño moral cuando se sufren sensaciones dolorosas sino también cuando se dificulta o impide la satisfacción de un interés sin disminución del patrimonio o cuando se pierde el prestigio profesional o el buen nombre. Esta es la corriente que entiende que las personas jurídicas pueden ser titulares del derecho al honor en el sentido de buen nombre o reputación»³⁵

La jurisprudencia contencioso-administrativa ha reconocido en alguna ocasión el derecho a la indemnización de daños morales a las personas jurídicas como en la STS de 31 de mayo de 2004, en la que se reconoce el derecho a la indemnización de una promotora inmobiliaria debido a la suspensión y posterior impugnación de una licencia de edificación por el Ayuntamiento que la había otorgado, impugnación que aunque finalmente no prospera, obliga a la empresa promotora a solicitar una nueva licencia, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento. Se le reconoce el resarcimiento por los gastos adicionales (tasas municipales, honorarios profesionales, publicidad), además de la indemnización de los daños morales, consistentes en la pérdida de imagen pública y descrédito profesional debidos a la suspensión de la licencia y la consiguiente imposibilidad de hacer frente a obligaciones con sus clientes previamente contraídas.³⁶

No obstante, algunos autores como GÓMEZ POMAR, han criticado duramente esta consideración del TS, por entender que supone una patrimonialización de los daños morales. Una pérdida de reputación, imagen o estima en un individuo puede provocar no sólo pérdida de ingresos y oportunidades de relación en el futuro esto es, pérdidas patrimoniales, sino también dolor, angustia, ansiedad, pena, desesperación, esto es, algo que no se puede compensar en dinero o en bienes que se cambian por dinero. Una

³⁵ CASADO ANDRÉS, B., *El daño moral en las personas jurídicas*, Noticias jurídicas, artículos doctrinales, área civil, disponible en: <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4760-el-dano-moral-en-las-personas-juridicas/>

³⁶ STS (Sala 3ª de lo contencioso-administrativo) de 31 de mayo de 2004 (Roj: 3745/2004)

pérdida de reputación o estima en una empresa no puede causar más que aumento de costes o pérdida de ingresos en el futuro, todo lo cual es, por definición, compensable por dinero.³⁷

6. FUNCIÓN QUE CUMPLE LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL.

Para seguir dando forma al objeto de este trabajo, es preciso que nos detengamos en analizar una cuestión muy importante, la función que cumple la indemnización del daño moral, es decir cuáles son las razones por las que nuestro ordenamiento jurídico y nuestros tribunales conceden una indemnización por esta clase de perjuicios. Como veremos, no se trata de una cuestión trivial, puesto que la función de la indemnización va a tener una especial relevancia a la hora de determinar su cuantía, no es lo mismo condenar teniendo en cuenta exclusivamente el daño generado, que hacerlo también en función de la reprochabilidad de la conducta de quien provoca el daño, o tratar de imponer una sentencia ejemplarizante que lleve implícito un fin de prevención general.

Una vez hemos examinado la diferencia entre daños patrimoniales y daños morales, podemos afirmar que la indemnización de los daños morales no puede tener el mismo cometido que la indemnización de un daño de carácter patrimonial.

La indemnización de un daño patrimonial tiene por objeto reponer al damnificado al estado anterior a la producción del hecho dañoso, bien sea con una indemnización por equivalente entregando la cantidad de dinero que corresponda al daño sufrido, una reparación en especie, de manera que se entreguen bienes por un valor equivalente al perjuicio causado o con una reparación específica arreglando la cosa dañada o sustituyéndola por otra igual.

Sin embargo, la indemnización de un daño moral no puede tener por objeto reponer al perjudicado a la situación anterior al hecho dañoso, ya que por su propia naturaleza estos daños provocan situaciones irreversibles que imposibilitan que la víctima pueda verse restituida a la situación anterior al daño. Por poner ejemplos bastante evidentes, el dinero no va a poder restituir el fallecimiento de un ser querido, o

³⁷ GÓMEZ POMAR, F. «Comentario a la sentencia del Tribunal supremo, Sala 1ª, 20.2.2002: el daño moral de las personas jurídicas» en *InDret: Revista para el análisis del Derecho*, Barcelona, octubre de 2002.

la privación de libertad que ha sufrido una persona en prisión cuando finalmente se le declara inocente, o incluso el tiempo y daño sufrido por los padres que son privados de la patria potestad de sus hijos de manera injustificada por la Administración.

Por todo ello debemos descartar que la indemnización del daño moral cumpla una función de reparación como en los daños patrimoniales. A continuación expondré las principales funciones que la doctrina ha atribuido a la indemnización del daño moral.

6.1. Función compensatoria.

La función compensatoria es la apoyada por la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia. Como señala el TS en una sentencia muy interpretativa, el dinero al producirse un daño moral «no puede cumplir su función de equivalencia como en materia de reparación del daño material, la víctima del perjuicio moral padece dolores y la reparación sirve para restablecer el equilibrio roto, pudiendo gracias al dinero, según sus gustos y temperamento, procurarse sensaciones agradables, que vendrán a contrapesar las dolorosas o desagradables, o más bien revistiendo la reparación acordada al lesionado, la forma de una reparación satisfactoria puesta a cargo del responsable del perjuicio moral».³⁸

Me parece en este punto bastante acertada la reflexión que realiza MARTÍN-CASALS, sobre la función compensatoria del daño moral al considerar que a lo que realmente responde el dinero cuando se indemniza un daño moral es a «ofrecer unos bienes de diferentes características, que respondan a unos deseos totalmente diferentes y que proporcionen diferentes satisfacciones. Debe servir de medio para posibilitar al dañado perseguir otros fines que le dejen en una situación que, aunque sea diferente de la existente “ex ante”, sea tan favorable como aquella».³⁹

En síntesis, al no poder restituir una situación equivalente a la que existía en el momento previo al hecho dañoso, lo que se busca mediante la indemnización es que el perjudicado pueda llevar el dolor de la mejor forma posible. Este espíritu compensatorio en la indemnización por daños morales ha dado lugar a la aparición de dos teorías que plantean la siguiente percepción sobre la función compensatoria.

³⁸ STS (Sala de lo Civil) de 7 de febrero de 1962, (Roj 2941/1962)

³⁹ MARTÍN – CASALS, M., «Notas sobre la indemnización del daño moral en las acciones por difamación de la LO 1/1982», en *Centenario del Código Civil (1889-1989)*, T.II, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, pp. 1231 y ss.

a) Teoría del *solatium*.

Según esta teoría, una indemnización patrimonial por daños morales permite la satisfacción de intereses y aspiraciones personales. La víctima ha sufrido unos daños o pérdidas que el dinero no va a poder borrar, sin embargo, le van a permitir que se sitúe en una posición económica mejorada y por lo tanto aspirar a ciertas satisfacciones que en la medida de lo posible puedan compensar las sensaciones negativas sufridas.

Por lo tanto, a la hora de cuantificar la indemnización que se va a conceder se van a tener en cuenta la intensidad, la duración de los dolores, los sufrimientos y los perjuicios.

Como advierte BARRIENTOS ZAMORANO⁴⁰, esta teoría presenta dos problemas: En primer lugar los daños que por su propia naturaleza son muy difíciles de cuantificar, como son los daños más graves, por ejemplo: la pérdida de un familiar, perjuicios estéticos graves, invalideces, puesto que en estos casos al referirnos a pérdidas insustituibles de tal calibre, el dolor padecido por la víctima no va a poder ser compensado de ninguna manera.

El segundo problema se plantea en aquellas personas que ya se encontraban con carácter previo al hecho dañoso en una posición económica muy beneficiosa. A una persona adinerada recibir una indemnización por daños de esta índole prácticamente no le va a generar ninguna satisfacción, ya que bien podría haber optado a tales satisfacciones con el patrimonio del que disponía antes de ser indemnizado.

En definitiva lo que propugna esta teoría, es que la indemnización contribuye de alguna manera a sobrellevar el dolor y angustia de las personas perjudicadas.

⁴⁰ BARRIENTOS ZAMORANO, M., «Daño extrapatrimonial o moral por actuación de una autoridad: su valoración y prueba», en *Sentencias Destacadas 2011, Santiago de Chile*, Silvia Baeza (dir.), Instituto Libertad y Desarrollo, Santiago de Chile, 2011, pp.233-258.

b) Teoría de la superación.

Esta teoría, a diferencia de la anterior, no busca en la indemnización simplemente sobrellevar el dolor y la angustia sufrida, sino su superación. Según esta teoría el patrimonio al no ser un atributo de la personalidad no puede generar por sí solo, por su propio incremento sensaciones agradables compensatorias de daños morales. De este modo, por mucha capacidad económica que disponga la víctima gracias a esa indemnización permitiéndole así, satisfacciones y placeres a los que antes no podría aspirar, el daño moral sigue estando latente en la víctima y debe superarse por ella, lo cual responde a un esfuerzo físico y psíquico, no de carácter patrimonial.

Lo que se busca aquí con la indemnización es la superación del daño producido, es decir la indemnización en dinero persigue dotar a la víctima de los medios que el hombre razonable necesitaría para sobreponerse del daño moral infligido. Por ello, para determinar la cuantía de la misma se va a tener en cuenta el grado de dificultad objetiva que muestra la víctima en función de sus características personales –en comparación con el hombre medio– para sobreponerse al daño.

6.2. Función preventiva.

Bien conocida es la frase “más vale prevenir que curar”, básicamente es lo que se pretende cuando se habla de la función preventiva en la indemnización por daños, ante la consecuencia de que se va a tener que pagar una indemnización de X cuantía a la víctima por los daños irrogados, se tenderá a tomar las medidas necesarias y las cautelas precisas para evitar que el daño se produzca.

De este modo se busca desincentivar aquellas conductas peligrosas, nocivas, descuidadas, erróneas que pueden causar daños de esta naturaleza. Esta función entronca bastante bien con la razón de ser de la responsabilidad patrimonial del Estado, el establecimiento de un control sobre la actuación administrativa, puesto que si las Administraciones públicas tienen que pagar los daños que han causado, tenderán a tomar medidas de precaución encaminadas a evitarlos. Como señala GÓMEZ LIGÜERRE, «no hay incentivo más perverso a la causación de daños que el que se

provee al potencial causante de perjuicios que sabe que no habrá de compensar a las víctimas de su comportamiento por todas las consecuencias dañosas que les genere»⁴¹.

6.3. Función punitiva.

La función punitiva, a mi parecer, no adquiere tanta importancia como las dos anteriores en cuanto a la indemnización de daños morales, ya que debemos recordar que existen otros mecanismos más adecuados para la consecución de este fin, como son el Derecho Penal o, el propio Derecho Administrativo en su vertiente sancionadora.

Asimismo, cuando nos adentramos en el ámbito sancionador no se entra a valorar tanto el daño sufrido por la víctima, sino que la atención se concentra de forma principal en la conducta que ha cometido el infractor.

Desde mi punto de vista, la función que debe prevalecer en nuestros tribunales al indemnizar los daños morales es la compensatoria, es decir la reparación del daño, entendiendo esta reparación no como una reparación en términos equivalentes como sería el caso de los daños patrimoniales, sino como satisfactoria ya sea de superación del daño o de intentar llevar el dolor y sufrimiento producido de la mejor forma posible gracias a la indemnización recibida. Lo más importante cuando se producen esta clase de daños es sin duda la reparación del perjuicio sufrido por la víctima, de manera que se deja en un segundo plano la función preventiva y punitiva, siendo en cierta medida funciones complementarias de la principal, la compensación del daño causado.

A pesar de ello, considero que la función preventiva va a estar siempre latente en la indemnización por daños morales, tanto de forma específica, evitando que el propio sujeto que ha causado el daño objeto de la indemnización vuelva de nuevo a actuar de la misma manera, o bien de forma general, desincentivando que otros sujetos cometan esas conductas nocivas, erróneas o peligrosas.

⁴¹ GÓMEZ LIGÜERRE, C.I. «Concepto de daño moral», en *El daño moral y su cuantificación*., Gómez Pomar y Marín García (dir.), Bosch, Barcelona, 2015, p. 52

7. CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO MORAL.

Uno de los requisitos que exige nuestro ordenamiento jurídico para la existencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es que el daño alegado sea evaluable económicamente, como señala la LRJSP en su artículo 32.2. No obstante, como podremos comprobar a continuación la valoración de los daños morales a diferencia de los materiales entraña una gran dificultad, debido a la prácticamente inexistencia de normas que regulen de forma expresa estos daños o de cualquier otra pauta general o baremo que permitan cuantificar el daño moral provocado por la Administración y lo traduzcan en una suma económica. A esto, se le añade la complejidad que supone asignar un precio a bienes que no están dentro de ningún mercado.

El artículo 34.2 LRJSP, referido a la determinación del *quantum* indemnizatorio tampoco arroja luz sobre el asunto, al señalar que: «La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social».

El primer inciso del precepto se refiere a la cuantificación de los daños materiales o patrimoniales, para lo cual se emplean baremos o parámetros establecidos con carácter previo, basados en elementos de carácter objetivo y comprobable. No se puede predicar lo mismo de la valoración de los daños morales, el segundo inciso hace referencia a los casos de muerte o lesiones corporales, que innegablemente van a suponer un daño de esta índole, pero para los cuales señala que se «podrá tomar» –de manera facultativa– los baremos vigentes en materia de Seguros y Seguridad Social, no obstante toda esta falta de regulación expresa en cuanto a la cuantificación de los daños morales da lugar a que la misma guarde un alto componente subjetivo, debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso.

Por consiguiente, tanto los interesados en caso de que inicien a instancia de parte un procedimiento de responsabilidad patrimonial⁴², como la propia Administración al resolver el procedimiento⁴³, así como el Consejo de Estado o, en su caso, el órgano consultivo de la CA⁴⁴, y en última instancia –si el asunto llega a la vía contencioso-administrativa–, los jueces y tribunales van a tener una difícil labor a la hora de cuantificar y valorar esta clase de daños.

7.1. La difícil labor de cuantificar.

El propio Tribunal Supremo ha señalado de forma reiterada que «El daño moral no admite, por definición, una cuantificación según criterios económicos. De aquí que, salvo que concurran otras circunstancias que permitan una evaluación distinta, sólo quepa acudir a la prudencia para fijar la indemnización.»⁴⁵. Como ya hemos adelantado, la valoración de esta clase de daños encierra un alto componente subjetivo, en palabras del Alto Tribunal «Los daños morales escapan por su naturaleza a toda objetivación mensurable, por lo que su cuantificación ha de moverse dentro de una ponderación razonable de las circunstancias del caso, situándose en el plano de la equidad»⁴⁶.

Por su parte, en el ámbito civil, el Tribunal Supremo también ha puesto de manifiesto que «El daño moral, en cuanto no haya sido objeto de un sistema de tasación legal, dado que no puede calcularse directa ni indirectamente mediante referencias pecuniarias, únicamente puede ser evaluado con criterios amplios de discrecionalidad judicial»⁴⁷.

Por lo tanto, dedicaré los próximos apartados a analizar los diferentes recursos de los que se han valido nuestros Jueces y Tribunales para cuantificar la indemnización por daños morales, puesto que en función de las características concretas de cada caso los Tribunales tienden a valorar esta clase de daños aplicando una técnica u otra.

⁴² El artículo 67.2 LPACAP indica que «en la solicitud que realicen los interesados, se deberán especificar [...] la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible»

⁴³ El artículo 91.2 LPACAP indica que el órgano competente para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial, debe pronunciarse en la resolución sobre la valoración del daño causado y la cuantía.

⁴⁴ El artículo 81 LPACAP señala que es preceptivo recabar informe del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la CA, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000€ o a la que establezca la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la LO 3/1980, del Consejo de Estado, el dictamen que se emita deberá contener una valoración del daño causado y la cuantía.

⁴⁵ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 5 de mayo de 2009 (Roj: 2656/2009)

⁴⁶ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 28 de febrero de 1995 (Roj: 1139/1995)

⁴⁷ STS (Sala de lo Civil) de 27 de julio de 2006 (Roj: 5866/2006)

7.2. La importancia de los precedentes.

La discrecionalidad judicial que tienen nuestros Jueces y Tribunales a la hora de fijar una cuantía para la indemnización de los daños morales es una potencial fuente de inseguridad jurídica, desigualdad entre las víctimas y desconfianza de los ciudadanos en el sistema judicial⁴⁸.

Una de las posibles herramientas de las que disponen nuestros órganos jurisdiccionales para limitar esa discrecionalidad es atender a las cantidades fijadas en casos análogos.⁴⁹ Sin embargo, deberán apartarse de las soluciones establecidas en ellos si el nuevo asunto del que están conociendo presenta importantes particularidades, siendo necesario que el órgano jurisdiccional justifique debidamente el motivo por el cual no debe seguir tales precedentes.

El Tribunal Supremo ha declarado en este sentido que «el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, protegido por el artículo 14 de la Constitución, relacionado con el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que consagra el artículo 9.3 de ésta, y en conexión también con el derecho a la tutela judicial efectiva, contemplado por el artículo de la propia Constitución, significa en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que un mismo Juez o Tribunal no puede modificar el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente idénticos, a no ser que se aparte conscientemente de él, ofreciendo una fundamentación suficiente y razonable que motive el cambio de criterio o, en ausencia de tal motivación expresa, resulte patente que la diferencia de trato tiene su justificación en un efectivo cambio de criterio por desprenderse así de la propia resolución judicial o por existir otros elementos de juicio externo que así lo indiquen»⁵⁰.

⁴⁸ DOMÉNECH PASCUAL, G. «La cuantificación de los daños morales causados por las administraciones públicas», en *El daño moral y su cuantificación*, Gómez Pomar y Marín García (dir.), Bosch, Barcelona, 2015, p. 529

⁴⁹ Vid., por ejemplo, la STS, 3ª, Secc. 4ª, 21.1.2009 (rec. 261/2006, RJ 772), en la que, para decidir el caso y cuantificar el daño moral causado a la recurrente por la irregular denegación de expedición del título de “Restaurador”, se invoca la STS, 3ª, Secc. 4ª, 19.2.2008 (rec. 2717/2005, RJ 1241), que había resuelto “un asunto prácticamente idéntico”. En ambas sentencias el Tribunal fija la cuantía de la indemnización por el daño moral causado en 12.000€.

⁵⁰ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 29 de mayo de 1999 (Roj: 3760/1999). El Tribunal condena a la Administración del Estado, a indemnizar al recurrente en concepto de reparación de los perjuicios morales que le fueron causados a consecuencia de la indebida prisión provisional sufrida y de la excesiva dilación en resolver por el Juzgado Central de Instrucción N°1

7.3. Aplicación de baremos por parte de los tribunales.

La conversión del perjuicio moral sufrido por el perjudicado en una suma monetaria, se ha visto facilitado por la existencia de baremos específicos. Debemos prestar especial atención al Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor⁵¹, que establece un baremo vinculante para los Tribunales, con arreglo al cual deben cuantificar las compensaciones debidas a las víctimas de daños y perjuicios personales y patrimoniales causados no dolosamente por accidentes de circulación.

La citada Ley contiene en su Anexo un sistema indemnizatorio que se articula por medio de un cuadro de importes fijados en función de los distintos conceptos indemnizables, que permiten, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, individualizar la indemnización de los daños sufridos por las personas en un accidente de circulación. Este sistema indemnizatorio incluye también una valoración para los daños morales causados en las víctimas.

Sin embargo, no nos vamos a detener en analizar el contenido de este cuerpo legal ya que no es objeto de estudio del presente trabajo, sin embargo, sí que debemos resaltar que los baremos contenidos en él, han sido tomados en cuenta por los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo para cuantificar el importe de las indemnizaciones debidas como consecuencia de actuaciones generadoras de responsabilidad para la Administración acaecidas en ámbitos ajenos a la circulación de vehículos a motor.⁵²

No obstante, el Tribunal Supremo advierte que «tales baremos, que tienen una función orientativa y no vinculante, al ser su ámbito propio la valoración de daños personales en el seguro de responsabilidad, sirven de referencia por la seguridad y objetividad jurídica que implica, un sistema objetivo de resarcimiento»⁵³.

⁵¹ Recientemente modificado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

⁵² SANCHEZ GONZALEZ, M. P. «Responsabilidad de la Administración por daños morales», en *La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, estudio general y ámbitos sectoriales*, T.I, Quintana Lopez (dir.), Casares Marcos (coord.), 2º ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 783.

⁵³ STS (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 4 de mayo de 2005 (Roj: 2815/2005)

La jurisprudencia es unánime al considerar que estos baremos no tienen más que un valor puramente orientativo para intentar objetivar la cuantificación de esta clase de daños, pero no se puede predicar de los mismos que sean de obligado y exacto cumplimiento cuando son aplicados a ámbitos ajenos a la circulación de vehículos a motor. Los Jueces y Tribunales que tengan en cuenta estos baremos para cuantificar daños morales no deben ceñirse estrictamente a los criterios establecidos en los mismos, sino que deben ponderar el resto de circunstancias concurrentes en el caso concreto.

En este sentido podemos citar la STS 18 de septiembre de 2009⁵⁴, en este caso la responsabilidad de la Administración deriva de un accidente aéreo militar ocurrido en 2005, cuando una avioneta del Ejército del Aire se estrelló en el casco urbano de Baeza (Jaén) causando el fallecimiento de la esposa e hija del recurrente, de nueve meses de edad, lo cual le provocó un grave trastorno de la personalidad.

El Consejo de Ministros fijó en 16.424,55€ la indemnización por el concepto de daños psicológicos, en aplicación de los baremos citados anteriormente, sin embargo el TS estimó que dicha cuantía era insuficiente estableciendo en su lugar una de 80.000€ argumentando lo siguiente: «El baremo tiene un simple valor referencial u orientativo que requiere su adaptación al caso concreto. Previsto para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación de vehículos a motor, mal cabe su aplicación o al menos sin correcciones al caso de autos, en el extremo relativo a la indemnización de las secuelas del recurrente [...] Y es que las circunstancias con las que se presentan los acontecimientos, se revelan como especialmente trágicas, espeluznantes, conmovedoras, y por ello acreedoras de un resarcimiento que, si bien es de muy difícil valoración, lo que está claro es que no se consigue con la aplicación de un baremo previsto para acontecimientos menos dramáticos y en atención a las responsabilidades de las compañías aseguradoras contratantes de seguros de vehículos a motor. Por otro lado, no parece ocioso recordar los estados de ansiedad, de depresión, de inadaptación, de trauma y de neurosis y psicopatía que dictamina la psicóloga... [y que] en todo caso revelan como muy escasa la indemnización reconocida de 16.424,55 euros por las secuelas del recurrente»

⁵⁴ STS (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 18 de septiembre de 2009 (Roj 5866/2009)

7.4. Relevancia de las bases de cuantificación.

La labor de cuantificar los daños morales producidos por la Administración al particular, puede verse facilitada por la existencia en determinados ámbitos de actuación de normativa específica que indica los elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar el importe que debe recibir el perjudicado en concepto de indemnización por el daño moral causado. Para ello, vamos a centrarnos particularmente en dos ejemplos de bases de cuantificación.

En primer lugar la prevista para los casos de lesión al honor del particular, el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, establece que la valoración del daño moral se realizará: «atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido».

Normalmente, las intromisiones ilegítimas atentatorias del derecho al honor se dan en relaciones inter particulares, pero la Administración también puede ser causante del daño, por ejemplo a través de los comunicados en los que se da cuenta a la opinión pública de los avances o los resultados de investigaciones sobre determinados hechos ilícitos o en casos de imposición ilegal de sanciones que conllevan un reproche social, un cierto deshonor.⁵⁵

En segundo lugar, otro de los ámbitos de actuación de la Administración donde encontramos bases para cuantificar el daño moral es en el relativo a las lesiones de índole moral que se producen sobre aquellas personas que después de haber sufrido prisión preventiva, son absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogados perjuicios, regulado en el artículo 294 LOPJ.

El ámbito de aplicación del artículo 294 LOPJ se restringe a los casos de inexistencia objetiva del hecho imputado, de modo que quedarían fuera de la indemnización aquellos supuestos en los que se declare inexistencia subjetiva⁵⁶. El

⁵⁵ SANCHEZ GONZALEZ, M.P., op. cit., p 785.

⁵⁶ La jurisprudencia había realizado tradicionalmente una interpretación extensiva del artículo 294 LOPJ –incluyendo en su ámbito de aplicación la inexistencia subjetiva del hecho–, hasta que el TEDH declara en la sentencia de 25 de abril de 2006, asunto Puig Panella c. España, y posteriormente en la sentencia de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España, que se debe realizar una interpretación restrictiva del

apartado segundo del mismo precepto establece unas bases de cuantificación cifradas en el tiempo de privación de libertad y las consecuencias personales y familiares que se hayan producido. Como señala SÁNCHEZ GONZÁLEZ «una práctica habitual de nuestros tribunales consiste en señalar, como base de la indemnización, una cantidad diaria o mensual que se multiplicaría por el periodo de permanencia en prisión. La cifra de 3.600 € al mes suele ser frecuentemente invocada»⁵⁷.

El TS ha intentado desarrollar jurisprudencialmente este precepto para establecer pautas que permitan lograr un trato equitativo en cada caso y evitar desigualdades en la indemnización. Para ello ha identificado los diversos daños que puede comportar la prisión indebida «a cualquiera le supone un grave perjuicio moral el consiguiente desprestigio social y la ruptura con el entorno que la prisión comporta, además de la angustia, ansiedad, inseguridad, inquietud, frustración, fastidio, irritación o temor que suele conllevar»⁵⁸. Por otro lado, el TS ha declarado que son relevantes «las circunstancias de edad, salud, conducta cívica, hechos imputados, antecedentes penales o carcelarios, rehabilitación de la honorabilidad perdida, mayor o menor probabilidad de alcanzar el olvido social del hecho así como la huella que hubiera podido dejar la prisión en la personalidad o conducta del que la hubiese padecido»⁵⁹.

Por ejemplo, en la STS 24 de marzo de 2010, el recurrente estuvo en prisión de forma indebida 8 meses y 5 días al ser imputado en un proceso penal por tráfico de drogas –es un caso todavía de inexistencia subjetiva de hecho imputado–, finalmente el TS fijó una indemnización total por importe de 33.600€, de los cuales 30.600€ se determinan a través del siguiente criterio «Este tribunal ha venido considerando para supuestos similares que el tiempo de privación de libertad se debe indemnizar, a falta de circunstancias personales o profesionales especiales, a razón de 3.600 euros/mes», a lo cual se añade los restantes 3000€ de indemnización en el siguiente concepto «Es preciso ponderar que existen otras circunstancias que han podido incrementar el daño moral sufrido por el recurrente, tales como la especial gravedad y reproche social que genera el delito que se le imputó -tráfico de drogas- lo cual provoca un daño moral añadido y las dificultades para obtener un permiso de residencia un trabajador

artículo, permitiendo únicamente la indemnización en los supuestos de inexistencia objetiva del hecho imputado.

⁵⁷ SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M.P., op. cit., p 791.

⁵⁸ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 26 de junio de 1999 (rec. 2475/1995, RJ 7638).

⁵⁹ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 20 de febrero de 1999 (rec. 6151/1994).

inmigrante que intenta regularizar su situación con la lacra que supone haber estado en prisión por un delito tan grave»⁶⁰.

Finalmente debe tenerse en cuenta la aplicación de un factor de progresión del daño, dado que la prolongación indebida de la prisión agrava gradualmente el perjuicio causado y por tanto no se puede fijar la misma cantidad de indemnización por cada día de prisión, ya que no es lo mismo estar en prisión preventiva una semana, un mes o un año. De esta forma, la base inicial se va a incrementar en función de la duración de la privación de libertad⁶¹. Sin embargo, no existe conformidad en los Tribunales a la hora de fijar el factor de progresión que debe aplicarse.

7.5. La libre cuantificación judicial.

Existen ámbitos de actuación en los que la Administración puede resultar responsable frente al particular donde no existen unas mínimas bases de cuantificación establecidas por ley. Realmente, en la mayoría de sectores no se cuenta con elementos que permitan ser tenidos en cuenta por los tribunales para determinar el *quantum* indemnizatorio.

Al no existir en la mayoría de los sectores bases de cuantificación para determinar la cuantía del daño moral, nuestros tribunales van a tener que tener fijarse en otra serie de elementos. Pese a ello, resulta muy difícil establecer unos parámetros fijos para ser tenidos en cuenta debido a la amplia casuística y dispersión existente.⁶²

Nuestros tribunales suelen justificar la fijación de la cuantía indemnizatoria por esta clase de daños en “las circunstancias del caso”, estando constituidas éstas por elementos tan dispares como “el alcance de las lesiones producidas, los días de hospitalización y el tiempo transcurrido hasta la estabilización de las secuelas”; “la gravedad de los hechos objeto del proceso penal... unido a que no consta que durante el procedimiento penal llegaron a adoptarse medidas restrictivas de libertad o el patrimonio del recurrente”; “descrédito de su imagen ante los compañeros y entorno social”; o es “la no satisfacción de su derecho a obtener un pronunciamiento en vía penal, por cuanto hubiera podido acudir a la vía civil para la obtención de una reparación económica”.

⁶⁰ STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 24 de marzo de 2010 (rec. 2430/2008)

⁶¹ DOMÉNECH PASCUAL, G., op. cit., p.

⁶² SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M.P., op. cit., p 794.

IV. Conclusiones del estudiante.

A pesar del reconocimiento tardío del daño moral como daño indemnizable por parte de nuestros tribunales, en especial, en el orden contencioso-administrativo, no cabe duda que son una clase de perjuicios que deben incluirse en el derecho de daños y por tanto, deben ser indemnizados en caso de que se produzcan, este criterio es el reconocido en la actualidad tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. No obstante, su aceptación es de las pocas cosas sobre las que existe consenso, al tratarse como hemos podido comprobar de una materia de contornos muy difusos al subyacerle un alto componente subjetivo.

En este sentido, la escasa y prácticamente inexistente regulación en nuestro ordenamiento jurídico de los daños morales no arroja ninguna luz sobre el problema. Desde mi punto de vista, debería haber una mínima regulación de los daños morales, estableciendo en primer lugar una cierta delimitación en cuanto a su contenido, no solo para diferenciarlos claramente de los daños patrimoniales, sino para proporcionar a los ciudadanos una referencia sobre qué clase de perjuicios pueden incardinarse en este tipo de daños, pese a ello esta delimitación deberá ser solo orientativa y en ningún caso cerrada, puesto que se trata de una materia estrechamente vinculada con la esfera personal y con los cambios constantes que se producen en nuestra sociedad.

Asimismo, considero que debería reducirse el amplio margen de discrecionalidad que tienen nuestros tribunales a la hora de cuantificar los daños morales. Las bases de cuantificación analizadas o los precedentes judiciales pueden proporcionar algún elemento de anclaje para realizar esta tarea, pero es insuficiente, ya que el margen de discrecionalidad sigue siendo excesivo, provocando que los órganos jurisdiccionales acaben valorando estos daños atendiendo exclusivamente a las circunstancias concurrentes de cada caso.

Al entrar a valorar los daños morales debemos tener en cuenta la función que cumple su indemnización. Tras haber analizado las tres posibles funciones que podía cumplir, lo más acertado me parece afirmar que las tres se encuentran presentes en su indemnización, aunque debo matizar, por los motivos ya analizados, que la función compensatoria es la que tiene un mayor protagonismo, dejando a la función preventiva y a la función punitiva como complementarias de la primera.

Finalmente me gustaría resaltar que la institución del daño moral tiene todavía mucho recorrido, ya que se trata de una institución relativamente reciente en la rama administrativa del Derecho. A partir del año 1975 es cuando se empieza a reconocer responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por esta clase de daños. Por ello espero que veamos en el futuro un mayor desarrollo de la misma y, en la medida de lo posible, que ese desarrollo dé paso a un mayor consenso del que existe actualmente sobre esta figura.

.

V. Bibliografía y referencias documentales.

a) Bibliografía.

BARRIENTOS ZAMORANO, M., «Daño extrapatrimonial o moral por actuación de una autoridad: su valoración y prueba», en *Sentencias Destacadas 2011*, Santiago de Chile, Silvia Baeza (dir.), Instituto Libertad y Desarrollo, Santiago de Chile, 2011.

BERMEJO VERA, J., *Derecho administrativo básico parte general*, Vol. I, 12º ed., Thomson – Civitas, Madrid, 2016.

CASADO ANDRÉS, B., «El concepto del daño moral, Estudios doctrinales», en *Revista de Derecho UNED*, n. 18, 2016.

CASANOVA ASECIO, A.S., «El daño moral: Dificultades prácticas en torno a su prueba y valoración», en *Revista jurídica de la Región de Murcia* VOL. 50, 2016.

CUADRADO ZULOAGA, D., «Fuerza Mayor como causa eximente de la responsabilidad patrimonial», en *Actualidad Administrativa*, n. 19, Sección Estudios de Jurisprudencia, 2005.

DÍEZ-PICAZO, PONCE DE LEÓN, L., *El escándalo del daño moral*, Thomson Civitas, Navarra, 2008.

DOMÉNECH PASCUAL, G. «La cuantificación de los daños morales causados por las administraciones públicas», en *El daño moral y su cuantificación*, Gómez Pomar y Marín García (dir.), Bosch, Barcelona, 2015.

GAMERO CASADO, E. y FERNANDEZ RAMOS, S., *Manual Básico de Derecho Administrativo*, 11º ed., Tecnos, 2014.

GARRIDO MAYOL, V., *La responsabilidad patrimonial del Estado, especial referencia a la responsabilidad del Estado legislador*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

GÓMEZ LIGÜERRE, C.I. «Concepto de daño moral», en *El daño moral y su cuantificación*, Gómez Pomar y Marín García (dir.), Bosch, Barcelona, 2015.

GÓMEZ POMAR, F.,

- «Daño moral», en *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, n. 1, 2000.
- «Comentario a la sentencia del Tribunal supremo, Sala 1ª, 20.2.2002: el daño moral de las personas jurídicas» en *InDret: Revista para el análisis del Derecho*, Barcelona, octubre de 2002.

HURTADO DÍAZ-GUERRA, I., *El daño moral en la responsabilidad patrimonial sanitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

MACÍA GOMEZ, R., «La dualidad del daño patrimonial y del daño moral», en *Revista de responsabilidad civil y seguro*, n. 36, 2010.

MARTÍN – CASALS, M., «Notas sobre la indemnización del daño moral en las acciones por difamación de la LO 1/1982», en *Centenario del Código Civil (1889-1989)*, T.II, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990.

MORENO MARTÍN, M.D., *El daño moral causado a las personas jurídicas*, Tesis doctoral, Manzano Fernandez (dir. tes.), Universidad de Córdoba, 2016, p. 70.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. P. «Responsabilidad de la Administración por daños morales», en *La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, estudio general y ámbitos sectoriales*, T.I, Quintana Lopez (dir.), Casares Marcos (coord.), 2º ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

VICENTE DOMINGO, E., *Los daños corporales: tipología y valoración*, Editorial Bosch, Barcelona, 1994.

b) Referencias documentales

BOTÍAS, ANTONIO, *Una noticia falsa provocó la primera sentencia del Supremo que valoraba en pesetas el derecho al honor*, Diario La Verdad, 25 noviembre 2012. Disponible en: <https://www.laverdad.es/murcia/v/20121125/murcia/cuesta-honra-joven-musso-20121125.html>.

CASADO ANDRÉS, B., *El daño moral en las personas jurídicas*, Noticias jurídicas, artículos doctrinales, área civil, disponible en: <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4760-eldano-moral-en-las-personas-juridicas->.

VI. Repertorio de jurisprudencia.

TRIBUNAL SUPREMO (Sala de lo Contencioso-Administrativo)	
Sentencia	Referencia
STS 12 de marzo de 1975	RJ 1975/1798
STS 9 de mayo de 1978	
STS 31 de enero de 1992	Roj: 9848/1992
STS 31 de enero de 1992	Roj: 16588/1992
STS 10 marzo de 1992	R.º 135/1986
STS 28 de febrero de 1995	Roj: 1139/1995
STS 5 de junio de 1998	RJ 1998/5169
STS 20 de febrero de 1999	rec. 6151/1994
STS 29 de mayo de 1999	Roj: 3760/1999
STS 26 de junio de 1999	rec. 2475/1995
STS 18 de julio de 2000	rec. 2005/1995
STS de 31 de mayo de 2004	Roj: 3745/2004
STS 4 de mayo de 2005	Roj: 2815/2005
STS 7 de febrero de 2007	rec. 6246/2002
STS 16 de octubre de 2007	rec. 9768/2003
STS 19 de febrero de 2008	rec. 2717/2005
STS 21 de enero de 2009	rec. 261/200
STS 5 de mayo de 2009	Roj: 2656/2009
STS 18 de septiembre de 2009	Roj 5866/2009
STS 24 de marzo de 2010	rec. 2430/2008
STS 25 de mayo de 2011	rec. 5513/2006
STS 6 de junio de 2011	Roj 3921/2011

STS 13 de octubre de 2015	RJ 4198/2015
---------------------------	--------------

TRIBUNAL SUPREMO (Sala de lo Civil)	
Sentencia	Referencia
STS 6 de diciembre de 1912	Jurisprudencia Civil, 1912, núm. 95.
STS 14 de diciembre de 1917	RGLJ, Tomo 141
STS 7 de febrero de 1962	Roj 2941/1962
STS 31 de mayo de 2000	RJ 2000/5089
STS 27 de julio de 2006	Roj: 5866/2006

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		
Sentencia	Comunidad Autónoma	Referencia
STSJ 11 diciembre de 1996	Asturias	R.º 1214/1995
STSJ 4 de mayo de 2000	País Vasco	Rº 484/2000
STSJ 9 de julio de 2015	Andalucía	rec. 33/2013
STSJ 22 de diciembre de 2016	Madrid	rec. 220/2016

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS	
Sentencia	Referencia
STEDH 25 de abril de 2006	Asunto Puig Panella c. España
STEDH 13 de julio de 2010	Asunto Tendam c. España